

Santiago, veintidós de junio de dos mil veintitrés.

**TENIENDO PRESENTE:**

Que, por sentencia de dos de mayo de dos mil veintitrés dictada en la causa RUC N° 2200542556-9, RIT N° 87-2023, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los magistrados Claudia Morgado Troncoso como presidente, Patricia Bründl Riumalló y Pedro Aravena Bouyer resolvió, en lo que concierne al arbitrio de nulidad que se referirá, lo siguiente:

“II. Que se condena al sentenciado Cristian Camilo Hurtado ya individualizado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de robo con intimidación consumado, perpetrado el día 3 de junio de 2022, en esta ciudad.

III. Que las penas impuestas a los acusados deberán ser cumplidas efectivamente abonándose a las misma el lapso de tiempo que los condenados han permanecido privado de libertad por esta causa, esto es trescientos treinta y tres (333) días, según consta en certificado de la Jefe de Unidad de Causas de este Tribunal.

IV. Que no se condena a los sentenciados al pago de las costas de la causa, conforme el Considerando Décimo Cuarto.

V. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, requiriendo al Servicio Médico Legal a fin de que tome las muestras biológicas correspondientes, determine las huellas genéticas de los sentenciados y se las incluya en el Registro de Condenados.

Ofíciase, en su oportunidad a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto, ejecutoriada que sea la presente sentencia, remítase al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, para su cumplimiento. Regístrese.”

Que, en contra de ese fallo, interpone recurso de nulidad doña Verónica Paz Eguyreizaga Barrios y Garacorchetía, abogada, defensor penal público, por el condenado Cristian Camilo Hurtado invocando de manera principal la causal del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y el artículo 297; y, de forma subsidiaria, la causal del artículo 373 letra b) en relación con el artículo 385; todos del Código Procesal Penal.



Y que, declarado admisible el recurso se procedió a la vista el seis de junio de 2023, oportunidad en que alegaron la recurrente y el Ministerio Público, fijándose para la lectura del fallo el día de hoy.

**OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que los hechos referidos por la recurrente y tenidos por acreditados en la sentencia que impugna, son los siguientes:

*“El día 03 de junio de 2022 a las 15:52 horas aproximadamente, en la vereda norte de la Avda. Libertador Bernardo O’Higgins, de oriente a poniente y al llegar a la altura del restaurant de nombre de fantasía 18, ubicado entre calle Tucapel Jiménez y Calle Manuel Rodríguez en la comuna de Santiago, los acusados, previamente concertados, se abalanzaron sobre la víctima RICARDO ANDRES ALVILLE GARCIA, y le arrebatan su teléfono celular marca Samsung, color negro, modelo Z fold, modalidad plan de la compañía WOM, que portaba en sus manos, siendo el acusado CRISTIAN CAMILO HURTADO quien le arrebató a viva fuerza, comenzando a forcejear con la víctima, mientras que el acusado GOMEZ VELANDIA al ver que la víctima no soltaba la especie, y forcejeaba con el coimputado realiza un ademán con sus manos como que lo golpearía con algo, y producto de esto la víctima suelta su teléfono para luego huir los acusados con la especie sustraída”.*

Indica la recurrente que, para los sentenciadores, los hechos descritos son constitutivos del delito de robo con intimidación prescrito y sancionado en el artículo 436 inciso primero en relación con el artículo 432 del Código Penal, en grado consumado, correspondiendo a su representado participación en calidad de autor, según lo dispone el artículo 15 No. 1 del Código Penal.

Sin embargo, de manera principal, la recurrente alega la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia dictada en ella por la causal de nulidad prevista en la letra e) del artículo 374, en relación con el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, invocando infracción a las exigencias de valoración de los medios de prueba en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal, en particular, el principio lógico de razón suficiente.

Y, de forma subsidiaria, alega nulidad en el solo pronunciamiento de la sentencia fundada en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por cuanto, en el pronunciamiento del fallo, se ha hecho una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo al errar la



calificación jurídica; y, consecuencialmente, imponiendo a su representado una pena mayor a la que corresponde de acuerdo a la ley.

La recurrente sostiene infringido el principio de razón suficiente pues -atendidos los argumentos de hecho y de Derecho que se plasman en la sentencia- el Tribunal no explicaría de manera alguna las siguientes cuatro situaciones: 1. Ausencia de acción intimidatoria destinada a sustraer especies, por parte de Cristian Hurtado; 2. Ausencia de intención de intimidar, por parte de Cristian Hurtado; 3. Ausencia de coautoría entre los dos partícipes en los términos del artículo 15 número 1 del Código Penal; y 4. Ausencia de nexo causal entre la acción de Cristian Hurtado y el resultado (entrega de la especie).

Finalmente, en razón de la causa principal de nulidad invocada, la recurrente pide que se la acoja, declarando la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia dictada en ella, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y se ordene la remisión de autos a tribunal no inhabilitado para que éste disponga la realización de un nuevo juicio; o bien, en razón de la causal subsidiaria, pide invalidar sólo la sentencia y dictar -sin nueva audiencia pero separadamente- sentencia de reemplazo estableciendo una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, remitiéndola condicionalmente.

**SEGUNDO:** Que, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *"Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)".*

Por su parte, el artículo 342 del mismo código, en su letra c) señala: *"Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297".*

A su turno, el artículo 297 del citado estatuto legal expresa: *"Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.*



*El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.*

*La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia".*

**TERCERO:** Que, la exigencia impuesta por el legislador a los sentenciadores en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal es que, al dar por probados los hechos y circunstancias, lo hagan en forma clara, lógica y completa, es decir, que la exposición no sea confusa o ininteligible, contradictoria, ni que omita hechos relevantes probados en relación con el contenido de la controversia.

Además, también exige que, para arribar a sus conclusiones, el tribunal valore la prueba producida conforme al artículo 297 del Código citado, es decir, que en su apreciación no contradigan los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, de tal modo que el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones sea reproducible.

**CUARTO:** Que, en efecto, en el motivo octavo del fallo se reproduce la declaración de la víctima, Ricardo Andrés Alville García, quien no sólo dio cuenta del hecho, sino que también reconoció a los dos imputados en audiencia, particularmente, a Cristián Hurtado como aquel que le quitó su celular, el mismo al que vio portarlo cuando los imputados bajaron a la autopista y hasta que los detuvieron; y quien además, interrogado por la defensa del segundo imputado Nicolay Gómez Valencia, indicó que creía que ambos "tenían experiencia porque conversaban entre ellos, parecía que se conocían".

El mismo motivo contiene, además, las declaraciones concordantes del Suboficial mayor de Carabineros don Marcelo Iván Velásquez Torres y del Cabo Primero don Cristián Justo Lillo Bello, contestes en lo medular con la declaración de la víctima por cuanto apreciaron directamente como ésta forcejeaba con un sujeto que intentaba quitarle algo de su mano, especie que sólo suelta cuando otro sujeto hace ademán de agredirlo, tras lo cual huyen



corriendo siendo perseguidos por el Cabo Primero Lillo e interceptados y detenidos por el Suboficial Velásquez.

**QUINTO:** Que, además de lo establecido en el considerando octavo del fallo sobre el reconocimiento de los imputados por la víctima y demás testigos funcionarios policiales, en el motivo décimo el *a quo* razona en particular y en mayor detalle sobre la participación de los acusados, concluyendo que ambos han perpetrado el ilícito en forma inmediata y directa, llevando a cabo actos de intimidación y de sustracción en contra del afectado.

Sobre el concierto previo requerido entre los acusados, el tribunal *a quo* lo estima acreditado por el hecho que el acusado Gómez Velandia participa realizando un ademán intimidante cuando el coacusado Cristián Camilo Hurtado no logra arrebatarse rápidamente el celular a la víctima, con quien forcejeaba; atribuyendo a esta acción coordinada y sucesiva la sustracción de la especie, razonando que las acciones de los coacusados no se pueden entender disímiles como para suponer que la intención de uno no era la del otro, añadiendo que tal concierto se ve corroborado porque ambos imputados huyen juntos en la misma dirección.

**SEXTO:** Que, en virtud de lo razonado en los considerandos octavo y décimo ya referidos, esto es, apreciando y valorando -de acuerdo al estándar legal del artículo 340 del Código Procesal Penal- la declaración de la víctima, las declaraciones de los dos funcionarios policiales, las fotografías introducidas de las vestimentas de los acusados resultaron suficientes para formar la convicción de condena, ya que sus declaraciones son armónicas, todos refirieron el forcejeo producido entre la víctima y el coacusado de vestimenta más oscura, que en la fotografía sin rostro todos reconocieron al acusado Cristián Camilo Hurtado, que los dos testigos presenciales vieron que la víctima solo soltó el celular cuando el otro sujeto, de vestimenta más clara y reconocido en fotografía como el coacusado Gómez Velandia, hace ademán de agredirlo, lo que resulta concordante a lo declarado por la víctima.

Así, el tribunal *a quo* considera que lo medular es que la víctima soltó el celular sólo cuando se sintió intimidado con ese gesto. Lo hace, también, sobre ciertas contradicciones planteadas por la defensa, pero que desestima por no considerarlas esenciales.

**SÉPTIMO:** Que, en primer término, la recurrente esgrime como vicio de nulidad de la audiencia del juicio oral y de la sentencia dictada en ella el que



los sentenciadores *a quo* no dieron razón suficiente de la alegación de la defensa sobre la ausencia de acción intimidatoria destinada a sustraer especies, por parte de Cristian Camilo Hurtado. A su parecer, Camilo Hurtado no realiza en el momento de los hechos ninguna “acción” con la finalidad de intimidar a la víctima para la entrega de las cosas, puntualizando que ni víctima ni testigos indicaron que el actuar de Camilo Hurtado intimidó a la víctima.

Sin embargo, este argumento para anular se estrella en el apropiado y suficiente razonamiento del tribunal a quo -manifestado en el considerando décimo del fallo- sobre la participación de los coacusados en los términos del artículo 15 No. 1 del Código Penal. Dicho motivo da cuenta no sólo de las pruebas que permitieron acreditar la participación; sino, también, el concierto previo requerido entre los acusados. Y en él se halla, reproducible y suficiente, el razonamiento que siguieron los sentenciadores para acreditarlo, en la especie, mediante una dinámica de participación en el ilícito que incluyó acciones coordinadas, ejecutadas de forma inmediata y directa, aunque distintas y sucesivas (forcejeo inicial de Camilo Hurtado y ademán sucesivo de Gómez Velandia); corroborado tal concierto, además, por la fuga conjunta.

**OCTAVO:** Que, enseguida, la defensa esgrime también como vicio de nulidad el que los sentenciadores *a quo* no dieron razón suficiente de su alegación de no existir intención de intimidar, por parte de Cristian Camilo Hurtado, pues el fallo no habría descrito el ánimo intimidatorio en el principio de la acción y, en consecuencia, en el actuar de Camilo Hurtado descrito por la víctima y los aprehensores, por lo que debería caer la calificación jurídica del ilícito como robo con intimidación.

Ese argumento para anular fracasa también porque -sin perjuicio de lo que se dirá sobre la causal subsidiaria- además de referirse, como se ha dicho, a la participación y al concierto previo de los acusados, los motivos noveno y décimo del fallo sí contienen lo que la recurrente extraña.

En efecto, primeramente, el motivo noveno discurre: “(e)n el caso de autos, se utilizó la intimidación con el objeto de anular la resistencia del afectado y lograr la sustracción de la especie, ya que Alville García retuvo su celular y forcejeo con el acusado Hurtado hasta el momento que ve que el acusado Gómez Velandia hace un gesto con su mano para agredirlo, ante lo cual, como el mismo declaró, prefirió entregar el celular que ser agredido



porque pensó que lo podía herir, gesto intimidatorio que también divisaron los funcionarios policiales”.

Y, en segundo término, en el motivo décimo el tribunal *a quo* argumenta que los actos de intimidación y sustracción en contra de la víctima no pueden entenderse disímiles; lo que en la especie es correcto, pues tal y como explican los sentenciadores *a quo*, no sólo porque exista una actuación coordinada ejecutada de forma inmediata y directa por cada uno de los involucrados; sino, también, porque la intención de uno (que forcejea denodada pero infructuosamente para arrebatar la especie) resulta ser también la del otro (que ejecuta ademán o gesto intimidante) resultando ambas acciones, de manera conjunta, conducentes y efectivas en términos del resultado último: la rendición de la especie.

Así, el razonamiento del tribunal *a quo* en esta materia es, aunque breve, no por ello menos apropiado y suficiente para incluir el ánimo intimidatorio en la actuación conjunta del acusado Camilo Hurtado.

**NOVENO:** Que, en tercer término, la recurrente alega como vicio de nulidad el que los sentenciadores *a quo* no dieran razón suficiente de su alegación de ausencia de coautoría entre los dos partícipes. A su parecer, el fallo no acredita o razona sobre el concierto, tanto previo como circunstancial, respecto del ilícito por el que condena.

Sin embargo, lo que la recurrente se cuida de recordar es que en el considerando décimo del fallo los sentenciadores *a quo* abordan de manera expresa el concierto previo de los coacusados, razonando sobre la base de dos acciones: el forcejeo infructuoso de Camilo Hurtado para arrebatar la especie y la participación de Gómez Velandia con su gesto intimidatorio que, finalmente, logra la sustracción de la especie. El fallo es claro en tratar una situación de codelincuencia o participación de varias personas en la realización conjunta del ilícito, distinguiendo apropiadamente sus exigencias: la existencia de un plan o disposición común -en la especie, concluyente en la conformidad o coincidencia- a ejecutar el hecho, comprobado por las acciones no disímiles a que alude el fallo, la división del trabajo delictivo en los términos ya mencionados y la prestación del aporte efectuado en fase ejecutiva, expresado en su resultado.

Si lo anterior no bastare, dicho razonamiento ha de ser complementado con las reflexiones que los sentenciadores hacen en el considerando octavo



al analizar y valorar la prueba rendida y que permitieron dar por establecido el hecho y fundar la convicción de condena. Así, por ejemplo, al sopesar la declaración de la víctima quien refiere coparticipación; y la de los dos funcionarios policiales aprehensores, que la corroboran.

En resumen, el razonamiento del tribunal *a quo* en la materia sí está contenido en el fallo y resulta apropiado y suficiente para fundar la coautoría del acusado Camilo Hurtado.

**DÉCIMO:** La recurrente alega finalmente como vicio de nulidad el que los sentenciadores *a quo* no dieron razón suficiente de su alegación de ausencia de nexo causal entre la acción de Cristian Camilo Hurtado y el resultado, la entrega de la especie, por falta de imputación objetiva pues su conducta no habría tenido repercusión en el resultado.

La recurrente parece olvidar que -de los hechos establecidos en el fallo y particularmente en sus motivos octavo y décimo- queda en evidencia que si bien es el gesto intimidante de Gómez Velandia el que rinde la especie, es su aprehensión previa y simultánea y su alejamiento posterior, efectuado todo por Camilo Hurtado, lo que principia y finaliza el hecho establecido como conjunto, concertado y concluyente.

En otros términos, de la sentencia que se impugna queda claro que la sustracción de la especie la inició y obtuvo finalmente el acusado Camilo Hurtado, fue él quien dio principio a la acción de sacar la especie de la esfera de resguardo de la víctima, mantuvo esa acción con denuedo hasta que lo consiguió y fue -además- quien huyó con la especie en su poder.

En resumen, en los motivos ya mencionados, la sentencia impugnada sí contiene imputación objetiva de la participación de Camilo Hurtado en el resultado, pues resulta claro que Camilo Hurtado inició la aprehensión forzada de la especie, la mantuvo durante la intervención de Gómez Velandia y la prosiguió tras haber operado en la víctima el efecto buscado y consentido por los acusados; sin todo lo cual el hecho establecido no hubiere tenido lugar.

**UNDÉCIMO:** Que, el vicio principal atribuido a la sentencia consistente en la falta de razón suficiente para explicar las cuatro situaciones precedentes cuestionadas no se configura, toda vez que el fallo aborda razonadamente -principalmente en el considerando octavo que contiene la declaraciones de la víctima y de los testigos, entre otras probanzas- tanto la





ocurrencia del hecho como sus circunstancias, entre las cuales se halla el forcejeo y el ademán intimidante, la huida con la especie, el reconocimiento de los imputados y la convicción de condena más allá del estándar exigido por el artículo 340 del Código Procesal Penal; pero, además, en el considerando décimo, que razona efectivamente sobre la conducta concertada, coordinada -aun cuando sucesiva- y causal o necesaria para lograr hacerse de la especie, todas, argumentaciones que revelan el razonamiento suficiente del tribunal *a quo* para decidir como lo hizo, permitiendo la reproducción del mismo.

**DUODÉCIMO:** Desechada la causa principal de nulidad, cabe examinar la procedencia de la causal subsidiaria de invalidación sólo de la sentencia, que la recurrente hace consistir en una errónea aplicación de lo dispuesto en los artículos 432 y 436 en relación con el artículo 15 No. 1, todos del Código Penal, con influencia dispositiva en la calificación jurídica del hecho pues debió condenarse a Cristián Camilo Hurtado por el delito de robo por sorpresa.

Los sentenciadores abordaron expresamente la alegación de la defensa de que el ilícito se trataría de un delito de robo por sorpresa, pero la desecharon razonando expresamente en el motivo noveno que: “al momento en que el imputado Gómez Velandia hace un gesto amenazante de agresión, en virtud del cual la víctima entrega el celular, este delito se transforma en un robo con intimidación, porque es la intimidación o amenaza la que fuerza la entrega de la especie”.

A pesar de lo que afirma en su libelo, la recurrente también pasa por alto lo razonado por los sentenciadores *a quo* en cuanto a que: “(l)os hechos reseñados... fueron constitutivos del delito de robo con intimidación en grado de consumado... pues se acreditaron suficientemente la concurrencia de los elementos de este tipo penal, esto es la apropiación de una especie mueble ajena, contra la voluntad de su legítimo dueño.”

Aún más, la argumentación del fallo se extiende a recordar el tenor del artículo 439 del Código Penal y lo hace en toda la extensión de la definición de intimidación de que trata, la que incluye: “los malos tratamientos de obra, las amenazas ya sea para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, o bien para impedir la resistencia u oposición a que se quiten o cualquier otro acto que pueda forzar a la manifestación o entrega”.



Ahora bien, para desvirtuar este capítulo de nulidad a esta I. Corte basta poner de relieve la dinámica de los hechos tal y como quedó establecida en el juicio y por la cual los dos acusados ejecutaron acciones con el objeto de anular la resistencia del afectado y lograr la entrega de la especie. En efecto, en el contexto de la dinámica que incluyó la intervención de Gómez Velandia, la víctima el Sr. Alville García finalmente no pudo resistir la acometida del acusado Camilo Hurtado, adscribiéndose en el supuesto legal indicado por los sentenciadores.

**DÉCIMOTERCERO:** Que, como conclusión de todo lo hasta aquí expresado, resulta claro que lo que se impugna en verdad como causales de nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia dictada en ella no es que falte al principio lógico de razón suficiente o que adolezca de exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados favorables o desfavorables al acusado, en la especie, en relación con las cuatro circunstancias que la recurrente señaló, ni en cuanto a la valoración de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, en lo principal; ni tampoco en errónea aplicación del Derecho con influencia en lo dispositivo al dictarse la sentencia, como se pide subsidiariamente.

Al analizar el contenido de la sentencia impugnada, en particular el extenso considerando octavo y el décimo, se aprecia cómo los sentenciadores describen y analizan la totalidad de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público con el fin de acreditar los presupuestos fácticos de la acusación. El fallo razona y valora la acusación formulada por el ente persecutor; luego, aborda las defensas de ambos acusados; y, por último, en los considerandos octavo, noveno y décimo, trata respectivamente de los hechos y circunstancias que se tienen por probados, de la calificación jurídica de los mismos y de la participación de los acusados, siendo éstos los considerandos centrales de la sentencia en cuanto a razonamiento y acertado análisis de la totalidad de la prueba rendida en el juicio y por los cuales los sentenciadores adquieren la convicción de condena de los acusados, Cristián Camilo Hurtado y Nicolay Alexander Gómez Velandia, como autores del delito de robo con intimidación, en grado consumado.

En concepto de esta Corte resulta evidente que -contrario a lo que se manifiesta en el libelo de nulidad- la recurrente únicamente cuestiona las



conclusiones probatorias de la sentencia, desconociendo los razonamientos que la sustentan y que ya se han expuesto y referido, con lo cual se aparta de los motivos de nulidad que invoca y desconoce la naturaleza del recurso intentado. Así, entonces, la omisión o el error que se reprocha a la sentencia impugnada no resultan efectivas, toda vez que el fallo da cuenta cabal del análisis de la prueba aportada al juicio y de las circunstancias para asignarle mérito, conteniendo las reflexiones necesarias y suficientes para desestimar la tesis de la defensa y para que esta Corte haga lo propio con ambas causales de nulidad invocadas, principal y subsidiaria.

Que, en mérito de lo expuesto y reflexionado, se concluye que el fallo en examen está suficientemente razonado para resolver como lo hizo y tampoco ha incurrido en errónea aplicación de ley.

En consecuencia, al no existir los vicios denunciados, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago cuya sentencia se impugna, ha cimentado cabalmente su decisión y no ha incurrido, por ende, en la infracción del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, que se le atribuyó en lo principal; ni tampoco en la del artículo 373 letra b) en relación con el artículo 385, ambos del Código Procesal Penal, a su vez en relación con los artículos 432, 436 y 15 No. 1 del Código Penal, invocada en subsidio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la abogada Defensor Penal Público doña Verónica Paz Eguyrreizaga Barrios y Garacorcheitía, abogada, defensor penal público, en representación del condenado Cristian Camilo Hurtado, en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, en la causa RUC N° 2200542556, RIT N° 87-2023 la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese y dese a conocer a los intervinientes en la audiencia fijada, sin perjuicio de su notificación por el estado diario; hecho, devuélvase.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco.

**Penal N° 2427-2023-**

No firma la ministra doña Merino Verdugo y el abogado integrante Sr. Plaza Reveco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo,



por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y por ausencia, respectivamente.

Pronunciada por la **Sexta Sala**, presidida por la Ministra señora María Paula Merino Verdugo, e integrada por la Ministra (S) señora Soledad Jorquera Binner y el abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco.





XMSGXFJKEZX

Proveído por la Presidenta de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintidós de junio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

